

LA DÉCADA DE 1990 EN UNE RECOMPRESIÓN DEL TIEMPO HISTÓRICO VENEZOLANO CONTEMPORÁNEO.

Alberto J. Navas Blanco,
Escuela de Historia. UCV
Venezuela

Resumen:

El agotamiento de las tendencias históricas estructurales, orientadas hacia el cambio político y social democrático y modernizador, iniciadas desde el año 1936, que se presenta en la Venezuela contemporánea desde la década de 1980, adquieren para la década de 1990 sus formas de manifestación coyuntural más agudas, particularmente en la manifestación político-militar de la crisis, adquiriendo una complejidad cuya naturaleza ha impedido, en su proyección hacia el siglo XXI el logro de una salida consensualmente aceptada que rehaga la viabilidad del proyecto nacional venezolano. Ponencia para su discusión en la mesa sobre el estudio de la década de 1990 en el 52º Congreso Internacional de americanistas, Sevilla 2006.

Palabras claves:

Periodización, Proyecto Nacional, Sistema Democrático, Década 1990 Venezuela, Crisis Política.

Abstract

The exhaustion of the structural-historical trends, oriented towards a democratic and modernizer political and social change, started in 1936. However, in the Contemporary Venezuela, these trends appear since the 1980 decade, but it is only in the 1990 decade that it reaches its more relevant conjunctural expression; that it is specially true in its political-militar side of the crisis, reached such a complexity until the 21st Century because it has stopped the achievement of a Venezuelan National Project by consensus. This paper was presented at the 52nd International Congress of Americanist, Seville 2006

Keywords: Periodization, Nacional Project, Democratic System, 1990 Decade, Venezuela, Political Crisis.

Résumé

L'épuisement des tendances historiques structurelles, orientées vers le changement politique et social démocratique et modernisateur, débutent l'année 1936, elles apparaissent pendant la décennie dès années 1980 au Venezuela contemporaine. Mais, c'est dans la décennie des années 1990 qui elles arrivent aux manifestations les plus accentuées, particulièrement dans la manifestation politique et militaire de la crise, en acquérant une complexité qui empêche au Venezuela du XXIe siècle la réussite d'un vrai projet national consensuel. Cette communication a été présentée à la table ronde

consacrée aux Études de la décennie 1990, au 52e Congrès International des Américanistes, Séville 2006.

Mots-clés: Périodisation, Projet National, Système Démocratique, Décennie 1990, Venezuela, Crise Politique.

INTRODUCCION:

El desarrollo histórico correspondiente a la década de 1990, ha ubicado a la sociedad venezolana en una etapa crítica de agudización de tensiones coyunturales, específicamente en el plano económico-social y político-militar, siendo ello la expresión de causas más profundas y complejas que operan desde un nivel causal-estructural, por lo que consideramos válido advertir que tales manifestaciones no son el resultado de una simple crisis y cuestionamiento de la democracia como régimen moderno, sino que más bien nos encontramos frente al afloramiento de manifestaciones claras del agotamiento y renovación cualitativa de un sistema social que hace crisis en sus estructuras y funcionamiento básico.

El proceso venezolano de adaptación crítica de la democracia liberal sobre nuevas bases modernas de poder, tanto en el plano sociopolítico como en el socioeconómico, radicó en una onda de comportamiento histórico que nació en torno a las convulsiones de 1928-1936 y se prolonga hasta nuestros días. En un primer segmento de este complejo y largo proceso, que va desde la muerte del Gral. Gómez en 1935 hasta la caída del Gral. Pérez Jiménez en 1958, se desarrolló con la fase inicial de un modelo de democracia financiada por los inmensos recursos del petróleo y tutelada por sectores civiles y militares de intermitente vocación autoritaria. En un segundo segmento, entre 1958 y el presente, el referido modelo democrático-autoritario se mantiene y complejiza, al generarse una mayor participación popular en términos de una práctica populista creciente, al desplegarse una hipertrofia económico-política del papel del Estado y un agudo deterioro de las instituciones mediadoras y reguladoras de las funciones sociopolíticas: los partidos políticos, sindicatos, gremios empresariales, fuerzas armadas y poder judicial.

Dentro de esta segunda etapa 1958-2004, reflexionaremos sobre el desarrollo crítico del sistema social y político venezolano desde la década de 1980 hasta inicios del siglo XXI, particularmente en la unidad de tiempo comprendida entre 1994 y 2004; desarrollo cuya tendencia la observamos hacia la prolongación de una crisis de indefinición y consenso nacional sobre un modelo compartido de progreso y democracia.

LA CRISIS DE LOS 90 Y SU PROYECCION EN EL SIGLO XXI:

La complejidad y protagonismo histórico de la crisis político-militar que caracteriza a Venezuela desde la década de 1990, nos obliga a comenzar con ella el tratamiento de una problemática que, como ya lo referimos, deriva de una causalidad más profunda y determinante; sin embargo, es posible penetrar toda esta intrincada situación utilizándola como puerta de entrada la crisis desatada en las instituciones políticas y en los mecanismos de formación del poder.

En primer lugar es importante señalar la tremenda importancia del acelerado e inesperado deterioro del sistema de partidos políticos venezolanos, que se evidencia con una dinámica degenerativa interna desde los años de 1980; problema de volatilidad que contrasta significativamente con otras realidades cercanas y de mayor duración estable, como es el caso de Colombia (Partido Liberal y Conservador) o los Estados Unidos de Norteamérica (Partido Republicano y Demócrata). Esta atípica velocidad en el comportamiento político partidista venezolano radicaba, en gran medida, en la forma diferenciada de financiamiento de la vida política nacional, originada en la inmensa riqueza petrolera, cuya capacidad dinamizadora le permitió quemar aceleradamente etapas de desarrollo institucional, pero con una tendencia distrófica que se expresaba en una muy limitada capacidad de los partidos para asimilar semejante velocidad evolutiva y responder eficientemente a los retos y demandas del sistema social, por lo que en el mediano y largo plazo se generó una deuda creciente de necesidades sociales en relación a las cuales las estructuras políticas (especialmente partidos, sindicatos y gremios) se quedaron rezagadas en su capacidad para instrumentar soluciones de fondo.

La mayor parte de los partidos políticos modernos venezolanos nacieron al calor de las luchas posteriores a la muerte del Gral. Juan Vicente Gómez en 1935 y maduraron muy rápidamente entre las décadas de 1940 y 1950, con éxitos y fracasos que terminaron por establecer una institucionalidad partidocrática estable desde 1958 en adelante. Las décadas de 1960 y 1970 representaron momentos de expansión y progreso en la dinámica del control partidista de la mayoría de las esferas de la vida nacional, no sin dejar procesos traumáticos en el camino, como la lucha armada desatada principalmente por partidos entonces de extrema izquierda (PCV y MIR), quienes excluidos de los pactos de gobernabilidad nacional adoptados por las dirigencias empresarial, sindical y partidista (AD, COPEI y URD) desde 1958, siguieron el imprudente camino de la insurrección y la consecuente derrota política (elecciones de 1963, 1968 y 1973) y militar, tanto en los frentes guerrilleros como en las rebeliones militares de Carúpano y Puerto Cabello en 1962.

El indudable éxito de la democracia representativa encarnado en el entendimiento político y la estabilidad alternativa en el control de los poderes públicos, entre los gobiernos de Rómulo Betancourt, Raúl Leoni y Rafael Caldera (1959-1974), arrastraba un mar de fondo que ya era perceptible a mediados de la década de 1970, pues el régimen de partidos había acusado la acumulación de un creciente y peligroso lastre de pragmatismo, nepotismo, burocratización y monopolio “oligocrático” (llamados

popularmente “cogollos” o “roscas” políticos), de los cuales se desprendieron vicios que minaron seriamente la capacidad del sistema de partidos para dar respuesta a las demandas y necesidades emanadas de una sociedad afectada por intensos procesos de crecimiento demográfico, con la consecuente presión sobre los servicios públicos demandando respuesta a graves problemas en los campos de la salud, vivienda, educación, seguridad y empleo. Los dos principales vicios que limitaban la capacidad de reacción efectiva del régimen de partidos eran, en primer lugar el llamado “flagelo” de la corrupción administrativa enquistada en casi todos los niveles de decisión pública y articulada con buena parte de los agentes del sector privado; y en segundo lugar, la drástica reducción de las posibilidades de movilidad ascendente en el seno de los propios partidos políticos, concentrando el control de los mismos en camarillas de tendencia gerontocrática, con sus familiares, socios y allegados; convirtiendo a dichas organizaciones en “maquinarias” para el control electoral y el tráfico de influencias que inevitablemente se deriva de ello.

Así como afloraron tales signos de deterioro, también se empezaron a asomar nuevos elementos característicos de la preocupación en la sociedad por encontrar alternativas de respuesta política diferentes a las estructuras partidistas que monopolizaban el control de los poderes desde 1958. Una de las primeras respuestas nació de las crisis internas vividas por los fracasados de los partidos de izquierda que habían seguido el camino insurreccional, operándose importantes depuraciones y divisiones, que en alguna medida reflejaban el rechazo creciente a nivel internacional por los regímenes denominados “comunistas” como los de la Unión Soviética y Cuba. El movimiento de mayor importancia nació con la década de 1970, bajo el mando de ex-dirigentes del Partido Comunista de Venezuela (PCV) como Pompeyo Márquez y Teodoro Petkoff fundadores del Movimiento al Socialismo (MAS), cuyo mensaje juvenil y democratizador arrastró al resto de los movimientos de izquierda (MIR, MEP, LS, etc.) hacia posiciones avanzadas inspiradas en el socialismo posible y democrático. Otros desprendimientos de izquierda, como el PRV-FALN derivado del PCV (liderizado por Douglas Bravo) operaron desde 1968 un lento proceso de luchas combinadas entre la legalidad (grupo “Ruptura”) y la ilegalidad (guerrilla urbana), infiltrándose clandestinamente en instituciones clave, como las Fuerzas Armadas Nacionales, cuyas consecuencias darían frutos veinte años más tarde. Un camino parecido recorrieron organizaciones desprendidas del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), con sus fachadas legales CLP – CLER (Comité de Luchas Populares y Comité de Luchas Estudiantiles Revolucionarias) y su brazo armado clandestino denominado “Bandera Roja”. La mayor parte de estas organizaciones de la nueva izquierda venezolana permaneció en una tímida minoría durante las décadas de 1970 y 1980, desapareciendo buena parte de sus cuadros iniciales, ya fuese por agotamiento político como por derivación hacia la búsqueda de mejores destinos en AD y COPEI.

Otras organizaciones menos partidistas-institucionales emergieron simultáneamente a la atomización de la izquierda, a la fosilización de URD y PCV y a la plenitud burocrática de AD y COPEI. Por un lado emergieron infinidad de movimientos juveniles y estudiantiles, de marcado tinte de clase media, al calor de la oposición de liceos y universidades a los gobiernos de Rafael Caldera y Carlos Andrés Pérez entre 1969 y

1978; todos ellos animados por el espíritu de rebeldía juvenil que sacudía al mundo desde París (Mayo Francés), pasando por México y llegando a Berkeley en los EE.UU. En las principales ciudades de Venezuela movimientos de alto grado de espontaneidad como el llamado “Poder Joven” (una compleja mezcla anómica de estudiantes, hippies y ex “patoteros”) predominaba en la cultura protestataria del momento. Otros movimientos más anárquicos, efímeros y violentos, como “Las Arañas Negras” (liceos de Caracas hacia 1972) o “COPELBO” (Facultades de la UCV en Maracay), por solo citar algunos, se limitaron a aderezar el clima de protestas con sus iniciativas desordenadas, cuyo legado sigue siendo hoy la del manifestante “encapuchado”, normalmente minoritario pero instrumentalmente útil para otras iniciativas políticas que se mueven en diferentes procesos de desestabilización particularmente después de 1989.

Algunos otros movimientos, con mucho menos orientación de izquierda, sino más bien en buena medida en oposición a ella, surgieron en el ámbito de la “iniciativa privada” y de la misma clase media, organizaciones civiles, algunas cercanas a destacados empresarios como el Dr. Pedro Tinoco (h) y su tesis del “Desarrollismo” o la figura de la T.V. Renny Ottolina, con el símbolo del “Buen Ciudadano”; fracasando la mayoría de ellos bajo el peso del entusiasmo limitado de un electorado atrapado aún por los dividendos reales o ilusorios de las grandes maquinarias partidistas. Las organizaciones vecinales, asociaciones cívicas y culturales, etc. no contarán hasta la década de 1990 con la capacidad de movilización y autonomía operativa suficiente, como para incidir significativamente sobre la dinámica del sistema político nacional.

La década de 1980 marcó la etapa crucial o punto de inflexión hacia la orientación crítica en la dinámica histórica de la sociedad venezolana; luego de dos décadas de confianza y crecimiento, los principales factores dinámicos del sistema social comienzan a señalar fallas graves de funcionamiento y se abren las puertas de la inestabilidad y, en consecuencia, la inseguridad económica, social y política. Desde el llamado “Viernes Negro” (18 de febrero de 1983) el gobierno del Presidente Luis Herrera Campins (1979-1984) decreta el inicio de una etapa de deterioro económico nacional, de cuyas consecuencias aún no hemos podido escapar en pleno siglo XXI; la devaluación del bolívar frente al dólar y la creación de un régimen de control de cambios diferenciales, fueron una terrible respuesta a una crisis de la cual el mismo gobierno había sido responsable, promoviendo el enfriamiento económico y la fuga de divisas. La terrible decisión de ajuste no hizo sino favorecer a los verdaderos causantes de la crisis, permitiéndoles, desde su privilegiado estatus político, monopolizar el cambio de divisas y amasar verdaderas fortunas.

La tardía destitución del Presidente del Banco Central de Venezuela, Dr. Leopoldo Díaz Bruzual, en febrero de 1984, agregaba un componente agravante a la ya profunda crisis de confianza económica, pues representaba una violación a la autonomía del instituto emisor, cuya condición había sido respetada por todos los gobiernos en los últimos 44 años. Para mayor desgracia, el gobierno del Presidente Jaime Lusinchi (1984-1989) surgido con una popularidad electoral sin precedentes, malbarató su oportunidad histórica y capital político, conservando los nefastos dispositivos económicos del gobierno anterior; devaluando nuevamente la moneda nacional, aumentando el precio de

los combustibles y traspasando el sistema de control cambiario diferenciado (RECADI) a un nuevo equipo de control político que sostuvo y empeoró las irregularidades y el enriquecimiento ilícito creados en el anterior gobierno.

La creación de la Comisión Presidencial Para la Reforma del Estado (COPRE) el 17 de diciembre de 1984, creó la impresión de importantes intenciones de cambio, y muchos de sus prestigiosos integrantes desplegaron valiosos diagnósticos y proposiciones de reformas que, de haber sido atendidas, hubiera ahorrado un inmenso costo político y social a los venezolanos de fines del siglo XX y la primera mitad del siglo XXI. Paralelamente, una monstruosa práctica se afirmaba, con la liquidación descontrolada de empresas del estado, como la Corporación Venezolana de Fomento (CVF), la Corporación de Mercadeo Agrícola (CORPOMERCADEO), etc. so pretexto de eliminar la ineficiencia y la corrupción, se dejaba al estado y a la sociedad venezolana desatendidos y sin instrumentos de control en una situación de creciente inestabilidad general, los vicios que se pretendía combatir solo fueron desplazados a otros escenarios y la relación de mutua protección estado-sociedad fundada desde 1958 quedó reemplazada por un irresponsable vacío funcional.

La década de 1980, calificable de lamentablemente pérdida de tiempo, tanto por los obstáculos enfrentados, como por la incapacidad para aprovechar las suficientes oportunidades todavía presentes para superar la crisis estructural; cerró con terribles presagios que amenazaban sobre la viabilidad nacional. En primer lugar, el fin de la Guerra de los Tanqueros (Irak-Iran: 1980-1988) anunciaba una inmediata estabilización del mercado petrolero mundial y un descenso de los precios del principal producto venezolano de exportación, con lo que la ya precaria situación heredada de los gobiernos de Herrera y Lusinchí, se convertía en una amenaza caótica para el futuro gobierno que iba a reinstalar a Carlos Andrés Pérez en su segunda presidencia (1989-1993). En segundo lugar, el llamado “Gran Viraje”, anunciado por el Presidente Pérez como un paquete de medidas de reajuste de la economía venezolana en febrero de 1989, fue inadecuadamente recibido por la sociedad venezolana y peor implementado por los nuevos ministros del régimen reformador. Una situación de desamparo social, especulación y desabastecimiento, con un estado ineficiente y minado por la corrupción pública y privada; no era la coyuntura adecuada para la aplicación de nuevos ajustes devaluacionistas, liberación de precios y tasas de interés, reforma tributaria, privatizaciones, descentralización, incremento de los combustibles y supresión de subsidios. En consecuencia, el llamado “Sacudón” o “Caracazo” iniciado el 27 de febrero de 1989, derrumbó en apenas días de gobierno el mesianismo que había llevado a Carlos Andrés Pérez al poder.

Una simultánea crisis político-militar se almacenaba en el subsuelo de la evidente decadencia socioeconómica. La corrupción administrativa y la impunidad, en un curioso e inusual ambiente de libertad de expresión y denuncias, socavaron seriamente la confiabilidad de la mayoría de la población sobre la clase política dirigente, desde 1984 con el escandaloso caso y fugaz detención por fraude al patrimonio público del ministro de Transporte y Comunicaciones Vinicio Carrera (vinculado a COPEI), se inició un encadenamiento de casos cada vez en peores circunstancias, como el asesinato del Dr.

Juan Luis Ibarra Riverol (08-02-1984) quien asistía legalmente a un oficial que había denunciado a tres ex-ministros de la Defensa por irregularidades administrativas, el caso de la “Manzopol” en 1988, y las denuncias sobre el financiamiento con fondos públicos de la campaña electoral de Jaime Lusinchi, que implicaba a su Secretaria Privada y futura esposa Blanca Ibáñez y al Ministro José Ángel Ciliberto, y, para finalizar la década en 1989 con la explosión del caso RECADI, verdadero desaguadero de miles de millones de dólares, manejados con insólita e irregular impunidad durante seis años, tanto por el gobierno de Herrera Campins como por el de Lusinchi. Obviamente, en semejante escenario, ni los ajustes planteados por el presidente Pérez entre 1989 y 1993 como el “Gran Viraje”, ni el interinato del Dr. Ramón J. Velásquez, y mucho menos el segundo gobierno precario e incoherente (Convergencia + “Chiripero”: una alianza de pequeños partidos oportunistas) del Dr. Rafael Caldera (1994-1999) con su “Agenda Venezuela”, pudieron rescatar el entusiasmo y la confianza del electorado y de la población en general hacia el liderazgo político tradicional.

El agotamiento del sistema político venezolano en los inicios de la década de 1990, acosado tanto por la negativa evolución de la realidad socioeconómica, como por la pérdida de la confianza en un liderazgo público y privado, civil y militar, que daba muestras de un enriquecimiento contrastante con la precaria situación del resto del país, así como por las respectivas crisis internas de los principales partidos políticos (AD, COPEI, MAS), que se mantendrán como una situación morbosa e irreversible hasta 1998, cuando una nueva ilusión mesiánica abrumaría al electorado, bajo la peligrosa convicción de suprimir la intermediación que hasta entonces habían representado, con éxitos y fracasos los partidos políticos por lo menos desde 1958.

Mientras tanto, en el plano internacional desde la reelección presidencial en los EE.UU. de Ronald Reagan en 1984 y la posterior elección de George Bush (padre) en 1988, se abrió una ventana de expansión a las democracias occidentales de tinte conservador (incluyendo la Gran Bretaña de Margaret Thatcher), que cosecharon grandes frutos con el estrepitoso derrumbe del mundo comunista, tanto por la llamada “Caída del Muro de Berlín” (noviembre de 1989), la derrota de los sandinistas en Nicaragua (triunfo de Violeta Chamorro en 1990), la primera invasión de los Estados Unidos a Irak (enero de 1991) y la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas: URSS (diciembre de 1991). El histórico triunfo occidental en la llamada Guerra Fría (1945-1991) condujo, paradójicamente, a un resultado electoral desfavorable para los republicanos de los Estados Unidos de Norteamérica, lo que significaba la llegada del demócrata Bill Clinton (elecciones de 1992) a la presidencia de la potencia triunfante y al consecuente disfrute coyuntural de ese éxito externo, lo que llevó a un notable descuido, durante la era Clinton (1993-1998), sobre el control de los escenarios internacionales conquistados en la década anterior; semejante desatención de la política exterior, impulsó hacia una neorradicalización de la postguerra fría, reactivándose gran parte de las tendencias antinorteamericanas latentes en muchas partes del mundo, surgiendo en consecuencia, un nuevo y poderoso movimiento “antiglobalización” que ve a los EE.UU. a la cabeza del dominio unipolar del mundo, así como percibe un interesante reacomodo de la Unión Europea hacia una inclinación multipolar en las relaciones mundiales, y finalmente una ultra radicalización del terrorismo islámico en acciones operativas de gran envergadura

sobre el propio territorio de los EE.UU. y sus aliados, como los ataques suicidas sobre el World Trade Center de Nueva York y el Pentágono del 11 de Septiembre de 2001. Complementariamente se debe contemplar la indisciplina nuclear de Corea del Norte y posiblemente Irak así como la proliferación de procesos políticos de variable acento antinorteamericano en América Latina, que han sabido capitalizar un acumulado y creciente malestar latinoamericano frente a la indiferencia de los EE.UU., como ha ocurrido en los casos de las conmocionadas Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador y Venezuela.

El fracaso militar de los golpes de estado desarrollados contra el gobierno del Presidente Carlos Andrés Pérez, el 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992, constituyó, a mediano plazo, la posibilidad de un éxito político para los líderes del movimiento golpista que supiesen capitalizar, dentro del esquema mesiánico tradicional, el extremo descontento popular que por el deterioro de las condiciones de vida se venía acumulando desde 1983, todo ello agravado por el clima de impunidad y la laxitud operativa del escenario internacional de la postguerra fría. El descontento militar que se venía incubando en el seno de las Fuerzas Armadas venezolanas desde la década de 1980 (aunque con raíces en las generaciones de cadetes ingresados en las Academias Militares desde la década de 1970), se materializó en grupos militares organizados clandestinamente como el denominado “MVR 200 Movimiento Revolucionario Bolivariano”, cuyas cabezas visibles fueron los Tenientes Coronales Hugo Chávez Frías, Francisco Arias Cárdenas, Joel Acosta Chirinos, Jesús Urdaneta Hernández y otros con importante poder en las guarniciones de Caracas, Maracaibo, Valencia y Maracay; contando además con una compleja mezcla de descuido o complicidad en algunos cuadros superiores de las FF. AA. NN., quienes tenían conocimiento y evidencias de tales situaciones conspirativas desde finales de la década de 1980, tal y como lo declaró públicamente el entonces Comandante de Ejército, Gral. Peñaloza Zambrano, luego de su pase a retiro.

El éxito militar relativo del Presidente Pérez frente a los golpes de febrero y noviembre de 1992, no se correspondió con la incapacidad política del gobierno para ganar la batalla en el contexto de la política civil; las FF.AA.NN. habían entrado en una peligrosa etapa de fractura interna, desmotivación general y deterioro institucional-operativo que las apartó del primer plano conflictivo por un tiempo; mientras que en el campo de la política civil, los partidos políticos pasaban por una sacudida interna motivada por el desgaste generacional de una dirigencia tradicional nepótica y cerrada a los cambios, por las divisiones grupales y el presidencialismo extremo, todos ellos factores que distanciaron tanto a partidos del estatus, como al propio gobierno de la complicada realidad social perdiendo así las bases de sustentación y la estabilidad. Lo que no pudieron lograr los tanques y aviones de los golpistas, se pudo alcanzar en forma relativamente rápida e incruenta por el juicio iniciado por el Fiscal General de la República Dr. Ramón Escobar Salom contra el Presidente de la República, bajo la acusación de manejos irregulares de fondos de la partida secreta de la presidencia en asuntos relativos a la situación política de Nicaragua. El 20 de mayo de 1993 la Corte Suprema de Justicia aprueba el antejuicio de mérito al Presidente y, de manera inmediata, se abre un período de transición bajo las presidencias provisionales de Octavio Lepage y el Dr. Ramón J. Velásquez, quien

designado por el Congreso completaría el resto período presidencial hasta 1994, prácticamente atrapado en el Palacio de Miraflores, sin el tiempo ni los recursos para enfrentar la crisis a fondo, pero logrando magistralmente llevar el país hacia las elecciones de diciembre de 1993.

A un mes de la caída de Pérez, estalla la crisis definitiva del partido socialcristiano COPEI, con la salida de su líder desde 1946, el Dr. Rafael Caldera, quien funda el partido “Convergencia” y genera toda una amalgama de alianzas con grupos políticos minoritarios, entre los cuales solamente el MAS contaba con una significativa presencia nacional, todo ello con la vista puesta en las elecciones presidenciales de diciembre de ese año. El anciano líder socialcristiano (entonces de 78 años de edad) logró aprovecharse de la atomización política del momento (se presentaron 18 candidatos presidenciales), las crisis internas de AD y COPEI, el apoyo de los medios de comunicación y de la amalgama de grupos y sectores políticos, que el mismo aceptó calificar como el “Chiripero”, para lograr bajo un pesado clima de abstención, un precario y discutido triunfo por 1.710.772 votos, sobre Claudio Fermín de AD con 1.325.287 votos, Oswaldo Álvarez Paz con 1.276.287 votos y el desafortunado Andrés Velásquez con 1.232.653 votos, resultados que marcaban un significativo agotamiento de la bipolaridad AD-COPEI, en favor de una dispersión de fuerzas poco alentadora en situación de crisis nacional.

Bajo un optimismo menguado, el anciano mandatario asumió una presidencia con un muy escaso respaldo electoral y una minoría parlamentaria, con partidos de oposición también débiles y fracturados, unas FF.AA. NN. perturbadas y aún amenazantes desde los diversos ángulos de su composición interna y, desde la cárcel del Cuartel San Carlos y luego el Penal de Yare, el excomandante Chávez preparándose, junto a sus aliados civiles y militares, para aprovechar a fondo la onda política que se venía levantando desde 1992, para lo cual las opciones partidistas tradicionales se encontraban francamente incapacitadas y postradas.

Un incomprensible desaprovechamiento de la coyuntura relativamente favorable, por parte del gobierno del Dr. Caldera y sus aliados, entre 1994 y 1998, haría pensar, tal vez injustamente, que en ese quinquenio se hizo todo lo posible para abrirle el camino al Tcnel. Hugo Chávez para su llegada al poder en el próximo período presidencial. Uno de los principales factores de perturbación fue el desarrollo de la crisis bancaria de mayor profundidad conocida en la historia de Venezuela contemporánea; la intervención del Banco Latino, el segundo en importancia nacional, decretada el 17 de enero de 1994, finalizando el gobierno del Dr. Velásquez, fue inmediatamente heredada por el gobierno de Caldera, anclándolo en una conmoción financiera de complejidad creciente, que ya en mayo de ese mismo año arrastró a la quiebra a otras importantes instituciones financieras como los bancos Metropolitano, La Guaira Internacional, Consolidado, Hipotecario de Occidente y Fiveca, a los que luego se agregarían el Grupo Latinoamericana-Progreso y el tradicional Banco de Venezuela.

El acento político-grupal en la conducción general de la crisis financiera, las fallas técnicas y éticas en el manejo del proceso por parte de FOGADE (Fondo de Garantías de

Depósitos y Protección Bancaria) y la delicada situación político social que contextualizaban la crisis bancaria, independientemente de las graves responsabilidades del caso tanto desde el sector público como del privado; tuvieron unas consecuencias profundas en el desarrollo de los procesos económicos, sociales y políticos del resto de la década de 1990; entre ellos destacamos: 1.- La pérdida de confianza general en el sistema financiero y la moneda venezolana, minando desde un comienzo las ya bajas expectativas en el posible éxito económico de la gestión Caldera, que permaneció atada hasta comienzos de 1996 a la rémora del desastre bancario. 2.- La fuga de banqueros, el retiro de la confianza de inversionistas externos e internos y la consecuente fuga de divisas, inevitables en una crisis bancaria de tales magnitudes, condujo nuevamente a los sistemas de control de cambios y devaluación de la moneda nacional, profundizando la ya compleja situación de desempleo (un 17% según la CTV), recesión económica e inflación, que para 1996 llegaba a un 106%. 3.- La adopción de un programa de ajuste económico, negociado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), a partir del anuncio de la llamada “Agenda Venezuela” por parte del gobierno del Dr. Caldera el 15 de abril de 1996, que en términos generales combinaba ajustes y compensaciones en un contexto liberalizador de tarifas, precios, combustibles y tributos, así como privatizaciones (incluyendo el delicado tema de la apertura petrolera) y restricciones fiscales; que poco se diferenciaban del paquete económico que había intentado aplicar el Presidente Pérez en 1989 y que había sido una de las principales causas de su derrumbe político, bajo las críticas del propio Caldera, entonces figura prominente de la oposición..

Otros factores de perturbación socioeconómica con elevadas repercusiones en la vida política, particularmente entre los años 1996 y 1997 de la gestión del Dr. Caldera, derivaron del Programa de Apertura Petrolera y la reforma a la Ley Orgánica del Trabajo. En el primero de los casos, los factores positivos y dinamizadores, que se derivaban de la participación privada externa e interna en la economía petrolera, que desde la ley de nacionalización petrolera estaba exclusivamente reservada al estado (1976); degeneraron en un ambiente políticamente caldeado y preelectoral, hacia radicalizaciones interesadas y perjudiciales que iniciaron un deterioro creciente en el clima corporativo de PDVSA, cuyas consecuencias se prolongarían hasta estallar en la grave crisis de la empresa desatada entre los años 2002 y 2003. Los enfoques privatizadores y antiprivatizadores de PDVSA se enfrascaron en una irresponsable lucha de posiciones extremas, olvidando la importancia vertebral de esa corporación para la vida venezolana, con el consecuente desplazamiento de los criterios técnicos por criterios políticos-partidistas. En segundo lugar, la discusión y promulgación de la reforma a la Ley Orgánica del Trabajo, el 18 de julio de 1997, se vio acompañada de una gran confusión y debates acerca de la cuestionable conveniencia de eliminar el cálculo retroactivo de las prestaciones sociales de los trabajadores; en consecuencia, los factores positivos que se podían derivar de las anunciadas reformas acordadas por una Comisión Tripartita (Gobierno-CTV-FEDECAMARAS), se diluyeron a mediano plazo en un gran sentimiento de frustración social, explotado por sectores políticos de oposición como el “despojo de las prestaciones sociales de los trabajadores”.

En ambos casos considerados, reforma petrolera y laboral, el gobierno del Dr. Caldera falló en implementar una estrategia política adecuada para hacer llegar a la población

general los potenciales beneficios de tales reformas, así como materializar resultados positivos en el corto/mediano plazo, capaces de contrarrestar el clima de “despojo” (petróleo y prestaciones) que se adueñaba de una opinión pública traumatizada por la desconfianza hacia los dirigentes públicos y privados.

En el escenario del manejo de la crisis político-militar acumulada desde el año 1992, el Dr. Rafael Caldera se orientó con obsoletos criterios propios y tal vez válidos en las circunstancias de su primer gobierno (1969-1974), cuando tuvo que enfrentar crisis parciales como la del Gral. Flores bajo criterios simplistas de mando/obediencia y prácticas de sanción/perdón; en consecuencia, el manejo inadecuado de la renovación de los altos mandos militares en 1994, especialmente con la destitución del Ministro de la Defensa Vicealmirante Radamés Muñoz León; quienes representaban en buena medida la oficialidad que había permanecido leal a la institucionalidad en los difíciles años de 1992 y 1993, adquirió características de bofetada con el sobreesimiento (marzo 1994) de las causas por rebelión militar que se les seguía a los líderes de los golpes de 1992, (quienes se acogieron a retiro) algunos de los cuales como el excomandante Francisco Arias Cárdenas pasaron a formar parte del gobierno.

Independientemente de las injusticias y amenazas que pesaban sobre la política militar del Presidente Caldera, lo cierto es que éste prefirió una opción favorable a su estabilidad hasta el año 1998, sacrificando el clima institucional interno y deteriorando aún mas la funcionalidad jerárquica dentro de todos los componentes de las Fuerzas Armadas. Semejantes desaciertos no dejaban otra opción a los altos oficiales de la institución armada, que el repliegue y espera hasta los comicios de 1998 para iniciar una recuperación integral, lo que se demuestra en el respaldo castrense recibido en sus inicios por el nuevo gobierno de 1999.

Al comenzar el año preelectoral de 1997 fue cuando el gobierno comenzó a superar parcialmente las terribles dificultades y desaciertos que lo habían atrapado desde 1994, no obstante ya parecía tarde, el electorado aún esperaba por opciones atractivas tanto desde el sector tradicional, como de la emergente opción de denominado “Chavismo” que se venía organizando dentro de la legalidad democrática desde el año 1994. En este contexto era preocupante la salud y frecuentes desapariciones del Presidente Caldera, quien ya superaba los 81 años de edad, así como la inconveniente presencia de algunos de sus familiares en la gestión de altas funciones del gobierno, mientras que el partido Convergencia se disuelve paulatinamente sin representar ninguna opción política viable. El partido COPEI agonizaba desde las pocas curules y cargos regionales y municipales que le restaban en la geografía nacional, sin poder recuperarse del tremendo golpe asestado por su propio fundador al crear tienda aparte en Convergencia en 1993; sin embargo los socialcristianos soñaban con un mesianismo propio que los sacara del foso y comenzaron a jugar con la idea de apoyar la candidatura presidencial de la reina de belleza (Mis Universo) Irene Sáez Conde, quien venía de una colorida y exitosa gestión como Alcaldesa del Municipio Chacao y, en efecto, el 9 de mayo de 1998 lanzan la candidatura de la bella alcaldesa. Si bien, Irene Sáez se encontraba muy bien posicionada en las encuestas de popularidad a fines de 1997 y comienzos de 1998, los dirigentes de su campaña no supieron entender las dificultades de convertir una popularidad personal y

aceptación política en una opción electoral preferencial efectiva y triunfadora; sobre todo en un ambiente radicalizado donde emergían otras opciones con mayor capacidad de arrastre del resentimiento social acumulado. Por atraparte, el lanzamiento de la candidatura presidencial de Henrique Salas Roemer desde el 23 de mayo de 1997, quien venía también de una exitosa gestión regional como Gobernador del Estado Carabobo, comprometía seriamente tanto los planes de los socialcristianos, como los que se preparaban desde el ángulo de la muy golpeada Acción Democrática.

En el caso específico de AD, tal y como había ocurrido con COPEI, el dominio gerontocrático del partido había entrado en crisis, pero conservaba suficientes fuerzas como para disputarse bajo la figura del Secretario General nacional, Luis Alfaro Ucero, la candidatura presidencial a otras personalidades más jóvenes e ilustradas como era el caso de Claudio Fermín, quien venía de una gestión complicada pero relativamente efectiva desde la Alcaldía de Caracas. La expulsión de Claudio Fermín de las filas de AD en octubre de 1997 y el descabellado lanzamiento de la candidatura presidencial por dicho partido de Luis Alfaro Ucero, condenaron definitivamente a la oposición “no chavista” a no poder suceder al ya casi autista gobierno del Dr. Rafael Caldera. Semejante atomización electoral de las opciones “no chavistas” presagiaba una debacle electoral sin precedentes para las opciones tradicionales y del gobierno, lo que se comenzó a hacer evidente e irreversible a partir de abril de 1998, cuando Hugo Chávez comenzó a remontar en las encuestas de opinión para preferencia electoral, generando de manera inmediata una crisis desestabilizadora en el resto de las opciones candidaturales (con la relativa excepción de Salas Roemer), incluyendo la “mortinata” candidatura de Irene Sáez.

En el seno de lo que tradicionalmente había representado la izquierda de tendencia marxista en Venezuela contemporánea, solamente el Movimiento al Socialismo (MAS) y algo menos el partido Causa R, poseían vigencia, coherencia y organización; mientras que el resto de las entidades no eran sino residuos de un pasado igualmente frustrante (PCV, MEP, URD, etc.). La figura de Hugo Chávez y su núcleo político-militar original renovado entre 1994 y 1997, absorbió con potencia la mayor parte de los residuos izquierdistas, quienes sumados a la fundación de una organización estrictamente chavista, en Julio de 1997, el “Movimiento V República”, integrarían el futuro “Polo Patriótico” con una importante capacidad para captar el descontento social entre el antiguo pueblo adeco y copeyano y convertirla en voluntad electoral. Pese a su acento conflictivo, la campaña política inicial del chavismo basó su éxito en no adoptar las posturas excluyentes y agresivas posteriores a 1999, lo que le significó acercamientos importantes desde todos los sectores políticos y sociales nacionales: empresarios, trabajadores, universitarios, campesinos, marginados y sectores externos de todo tipo.

No obstante, la llegada del MAS y la Causa R al polo chavista, tal vez por ser los grupos de izquierda más estructurados, no ocurrió sin traumas. En el caso de la Causa R, desde febrero de 1997 se operó una división entre el grupo que seguirá la opción de Hugo Chávez (Pablo Medina y Aristóbulo Istúriz) y el grupo moderado encabezado por el dirigente sindical Alfredo Ramos; este partido de poca presencia nacional pero de cierta efectividad política por su organización en base a “cuadros” heredada del antiguo PCV,

consolidaría su división definitiva hacia diciembre de 1997 con la fundación del grupo PPT (Patria Para Todos), que a su vez se ha ido atomizando, con la pérdida de sus más importantes figuras como Pablo Medina cada vez más alejado del mensaje chavista.

En el caso del Movimiento al Socialismo, este también sucumbió ante la sacudida del abrupto e inesperado crecimiento de la candidatura de Hugo Chávez desde abril de 1998, siendo el MAS un movimiento abierto y contestatario propio del ambiente político de la década de 1970, había evolucionado hacia un creciente pragmatismo electoral, llegando a ocupar importantes cargos regionales y nacionales, especialmente bajo la administración del Presidente Caldera entre 1994 y 1998; no obstante, y pese a la presencia de una importante corriente crítica hacia la naturaleza autoritaria que ya se le señalaba al chavismo, el MAS aprobó el 11 de junio de 1998 respaldar la candidatura presidencial del Chávez y, automáticamente, se generó una aguda reacción negativa en los cuadros superiores y fundadores de la organización masista; desde entonces Teodoro Petkoff y Pompeyo Márquez (junto a un importante número de dirigentes) se retiraron de la militancia del MAS y pasaron a una posición de espera crítica pero constructiva desde 1999 en adelante.

En consecuencia, la aspiración de integrar un solo partido o movimiento de respaldo a la gestión política de Chávez, que reeditaba en viejo fantasma de un partido único de las izquierdas, antes y después de 1998, no solamente había fracasado en el proceso de disolver las fronteras entre las tradicionales parcelas de un grupo y otro, sino que simultáneamente todos y cada uno de esos movimientos prochavistas, incluyendo al MVR y el núcleo original del MBR 200, han sufrido desgastes y desprendimientos importantes; todo ello como producto de las luchas internas de semejante multitud amalgamada de ideas e intereses. A todos estos factores críticos, se debe agregar el recelo y competencia que genera en los grupos civiles prochavistas, la cercanía de los cuadros militares (activos y retirados) a la figura central del llamado “Proceso” quien, al fin y al cabo es un líder de formación militar, teniendo más éxito en el terreno de la política civil desde 1998, pero conservando en su más íntima confianza cuadros de origen militar.

Para noviembre de 1998 la suerte parece estar echada en el escenario de la política venezolana, aunque en las elecciones parlamentarias realizadas el 8 de noviembre Acción Democrática conservaba una leve mayoría en el Congreso, seguida por una menor pero importante representación del MVR; las encuestas señalaban una inequívoca orientación del electorado (con una previsible y peligrosa tendencia a la abstención) hacia favorecer la opción de Hugo Chávez como próximo Presidente de la República. Esta reaparición de una preferencia mesiánico-electoral dominante (que recordaba los mejores momentos del ex-presidente Pérez hacia 1973 y 1988) se corroboraba tanto en que los débiles partidos prochavistas por sí solos no contaban con suficiente capacidad independiente para el desarrollo de un proselitismo político-electoral propio; como también en la crisis y desorientación de sus opositores de los partidos tradicionales, quienes aún no habían comprendido la naturaleza sociocultural del naciente liderazgo de Chávez y su capacidad para explotar mejor el malestar generado por los garrafales errores de fondo cometidos por el liderazgo predominante en Venezuela desde la década de 1980.

Entre el 24 de noviembre y el 6 de diciembre de 1998, fecha de las elecciones presidenciales, los sectores no chavistas del espectro político sucumben en una crisis que derrumba estrepitosamente las candidaturas improvisadas de Irene Sáez, Alfaro Ucero y el mismo Claudio Fermín (quien había declinado su candidatura desde el 8 de noviembre), todo ello en pro de una todavía más improvisada búsqueda de unidad en torno a la figura candidatural de Henrique Salas Roemer. Tal vez era demasiado tarde para recuperarse de los daños acumulados tras dos décadas de abandono del ejercicio efectivo de la política, tanto en la regulación como en la promoción de las realidades sociales. Una unidad nominal ya no podía tender los puentes sociopolíticos necesarios para evitar la llegada de los intrusos que tocaban las puertas del sistema político desde los golpes de estado de 1992; infinidad de segmentos e individualidades “oportunistas” (desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, algunos con razones comprensibles) se filtraron hasta los menos pensados resquicios de la organización electoral del chavismo y dejaron a la “sopa de letras” de los partidos y grupos tradicionales bajo una inmovilizante derrota que tardarían mucho tiempo en comprender. El denominado “Polo Patriótico” se había apropiado de una parte significativa de la antigua y descuidada votación popular de Acción Democrática y Copei, obteniendo una mayoría no abrumadora pero sí significativa del 56%, todo ello teniendo como eje el fenómeno socio-comunicacional que representaba la figura y discurso del Chávez candidato, y mucho menos como el aporte cuantitativo de la infinidad de grupúsculos que oportunamente se habían aproximado al “carro ganador”, lo que constituía, por demás un fenómeno normal en los procesos electorales venezolanos desde 1958 en adelante.

El 39% de votación obtenido para una candidatura tan improvisada como la del Gobernador Salas Roemer, no era un resultado nada despreciable, sobre todo si se consideraba que esa misma alianza conservaba una mayoritaria representación en el poder legislativo nacional y en las gobernaciones y municipios. Y en lugar de dedicarse a la reorganización estructural y programática durante el año 1999, los partidos tradicionales, convertidos ahora en oposición, se enlodaron en una curiosa combinación de repliegue y pequeñas peleas, dejándole libre el campo del proceso constituyente al nuevo gobierno, desechando la posibilidad de involucrarse en alianzas inteligentes y estratégicas con los nuevos factores de poder, así como oponiéndose constructivamente a los primeros indicios de extralimitación del poder, para así recuperar terreno perdido y no figurar como simples “opositores a los cambios”.

Para el nuevo gobierno, asentado en el poder bajo una dramática toma de posesión el 2 de febrero de 1999, se trataba de un año de expansión y explotación de los logros alcanzados en el año anterior. Un innecesario atisbo de irrespeto por la institucionalidad se asomaba en la modificación del protocolo de juramentación presidencial, al invocar la negatividad de la muerte (al referirse a la Constitución “moribunda” que le había permitido llegar al poder por los votos en 1998 y no por las armas en 1992) en su juramento, bajo la mirada triste y ausente del Dr. Caldera, se conformaba un cuadro de presagios nada halagadores. El anuncio de un referendun consultivo, durante el discurso de toma de posesión, para la convocatoria a una Asamblea Constituyente, puso en manos del nuevo presidente la iniciativa política por el resto del año y colocó al parlamento en el inicio de un declive funcional al despojarlo del debate necesario para establecer las

condiciones de dicha convocatoria, ese mismo Congreso le habilitó poderes especiales al Presidente (por seis meses) el 22 de abril de dicho año.

Ante el repliegue y la visión microhorizontal (o de corto alcance) de la nueva oposición, el naciente gobierno se anotó un nuevo éxito al obtener un 80% de respaldo para la convocatoria a la Asamblea Constituyente en las votaciones del 25 de abril de 1999. Dentro de lo que en política se llamaría efecto “Dominó”, las elecciones para integrar la Asamblea Nacional Constituyente realizadas el 25 de julio de ese mismo año, le adjudicaron a los candidatos “oficialistas” 124 de los 131 curules totales. Pese a la mayoría y heterogeneidad política en la composición de los constituyentitas prochavistas (que se demostraría luego en el alejamiento de muchos de ellos del oficialismo) la bancada oficial adelantó un proyecto de constitución muy poco digerido por los legisladores, menos validado en instancias académicas y escasamente consultado con las respectivas realidades involucradas en una normativa de rango constitucional. El propio ejecutivo, autor-promotor del anteproyecto de nueva Constitución, pudo ahorrarse muchos problemas validando y consultando los contenidos críticos de la futura Carta Magna, especialmente en lo referido a los derechos políticos de los militares tan ingenuamente manejado, la convocatoria al referendun revocatorio sin el debido estudio de aplicabilidad sociopolítica, la reelección presidencial fuente eterna de inestabilidad en Venezuela y el irresponsable abordaje del tema de la propiedad privada sin considerar la importancia y arraigo que este concepto tiene en una sociedad de dinámica ascendente como lo ha sido Venezuela desde el inicio de la era petrolera.

Cuando el 15 de diciembre de 1999 un 80% del electorado que concurrió al referendun para respaldar la nueva Constitución se manifestó por el “SI”, se entró en una nueva etapa del régimen, pues aunque el Presidente Chávez conservaba una alta popularidad, esa mayoría referendaria no significaba automáticamente un espacio político exclusivamente chavista, sino la expresión de significativos sectores de la sociedad que anhelaban una nueva etapa de estabilidad, cambios constructivos y progreso social; también se debe considerar la elevada abstención (cerca al 60% del electorado total) que acusaba los primeros signos de un debilitamiento del entusiasmo iniciado en diciembre del año anterior. La tragedia de fines de 1999, cuyas lluvias, aludes y derrumbes dejaron miles de fallecidos y desamparados, enlutaron el panorama nacional y enfriaron la actividad política hasta bien entrado el año 2000.

A partir del año 2000 el régimen del presidente Chávez comienza a exhibir signos de endurecimiento político mucho más allá de los límites esperados por el resto de la comunidad política nacional e internacional. Por un lado los poderes especiales con los que habilita la Asamblea Nacional al Presidente, para legislar por decreto en los campos económico, social y administrativo, además de contradecir el nuevo y dinámico papel legislativo que debía tener la Asamblea Nacional, se activa la oposición ante las potenciales extralimitaciones encerradas en dicho proceso, donde el poder legislativo declinaba el protagonismo que constitucionalmente le correspondía. No obstante, la relegitimación de poderes ocurrida en las elecciones del 30 de julio del año 2000, Chávez demuestra conservar su fortaleza promedio (con un 59% de los votos) y alcanzar mayoría en la Asamblea Nacional. Sin embargo, desde los escenarios de la oposición comienzan

a expresarse signos preocupantes para el gobierno, en primer lugar, durante las elecciones rectorales de la Universidad Central de Venezuela, en abril de 2000 triunfa holgadamente una alianza de oposición encabezada por el Dr. Giuseppe Giannetto, quedando en un lejano último lugar el candidato identificado con el gobierno, el Dr. Nelson Merentes; se trataba de la primera derrota electoral significativa del denominado “chavismo”, que junto al proceso electoral de diciembre de ese mismo año ocurrido en el seno de la Confederación Venezolana de Trabajadores (CTV), en el que Carlos Ortega derrotó a Aristóbulo Istúriz; parecían abrir las puertas de una realidad a mediano plazo explosiva.

En el terreno internacional el año 2000 se inicia con una polémica discusión en torno a la incomprensible actitud del gobierno nacional al rechazar la ayuda del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, quien a solicitud del Ministro de la Defensa Gral. Raúl Salazar Rodríguez ya había movilizado importantes recursos de ayuda civil y militar (vía naval) para apoyar a Venezuela en una desgracia socionatural que se había escapado de su control, dejando miles de muertos y refugiados en los estados Vargas y Miranda. Estos primeros roces, fueron parcialmente recubiertos con la salida del Gral. Salazar del ministerio y su alejamiento como embajador en España; terminaron por complicarse con los viajes presidenciales hacia países manifiestamente enemigos del gobierno norteamericano y de sus aliados (en el mes de agosto de 2000), concretamente en las giras oficiales hacia países cuyos gobiernos han sido frecuentemente asociados a la práctica del terrorismo islámico, como la Libia del Coronel Muamar Gadafi (hoy en reconciliación con los EE.UU. e Inglaterra) y el Irak del entonces autocrático y temido Saddam Hussein. No obstante, pese al valor simbólico de tales giras, no representaban una amenaza real y efectiva contra los intereses occidentales y, para ser honestos se inscribían en los lineamientos generales tradicionales del acercamiento de Venezuela hacia sus socios petroleros del norte de África y Medio Oriente. Por otra parte, la firma del acuerdo de cooperación petrolera en el que Venezuela otorga condiciones especiales al gobierno cubano para el suministro petrolero (el 30 de octubre de 2000), resolvió grandes problemas al agotado gobierno de Fidel Castro, desamparado desde la disolución del mundo comunista y mundialmente cuestionado por su negativa hacia una apertura democrática luego de más de cuarenta años en el poder. Independientemente de las críticas internas que señalaban las irregularidades e inconveniencias patrimoniales de semejante convenio, en el fondo se presentaban consecuencias internacionales de mayor importancia, todas ellas derivadas al desapego a la cooperación con el gobierno de los EE.UU., principal cliente del petróleo venezolano, y la priorización de la presencia de personal cubano en Venezuela, que si afectaba puntos vitales de interés estratégico norteamericano en el hemisferio occidental; pues el suministro petrolero a Cuba, en si mismo, no era sino una reedición de viejos acuerdos con la URSS ejecutados por gobiernos anteriores con el régimen del mismo cuestionado gobernante antillano.

Una reflexión es pertinente a la altura del año 2000, pues a esta altura del tiempo histórico venezolano se combinan una serie de elementos y datos que permiten apreciar la naturaleza contextual de la crisis en el escenario hemisférico y, particularmente, latinoamericano-caribeño. Desde la segunda mitad de la década de 1970, Venezuela, como potencia energética de Sudamérica había consolidado una posición hemisférica envidiable, tanto por sus recursos naturales, humanos y financieros; como por su

estabilidad institucional; a la luz de tan prometedora situación se había iniciado un creciente proceso de penetración y arraigo de intereses venezolanos hacia el Caribe, Centroamérica y el contexto andino (regiones sometidas a la pobreza e inestabilidad sociopolítica), inversiones, ayuda y cooperación, pública y privada, dieron un aire de respiro y esperanza a tal contexto deprimido, pero al mismo tiempo, aparecieron recelos y despertaron preocupaciones desde otros centros de poder cuyas proyecciones e intereses se toparon inesperadamente con la intrusa y dinámica presencia venezolana. La caricatura de un supuesto “subimperialismo venezolano” asomaba la fachada apenas de algunos agentes secundones de intereses mayores, como el Caribe angloparlante, siendo los verdaderos poderes por los menos tres: Primero, el tradicional status de potencia dominante de los Estados Unidos sobre Centroamérica y el Caribe, indiscutido desde la derrota española en la Guerra Hispano-norteamericana y la “solución Roosevelt” al Bloqueo anglo-alemán a Venezuela, es decir desde comienzos del siglo XX. En segundo lugar, la ruptura del monopolio centrocaribeño de los EE.UU., al tener que aceptar la presencia dominante de la URSS en Cuba desde la década de 1960, hizo de ese escenario regional un campo de fricción de primer orden, (Crisis de los Misiles, El Salvador, Nicaragua y Grenada, etc.) en el que potencias secundarias como Venezuela tenían poco que buscar. En tercer lugar, la proyección de la potencialidad caribeña de Colombia, ya no se limitaba a los tradicionales diferendos fronterizos con Venezuela (el Golfo de Venezuela y la Goajira), sino a una vocación de profundidad en el Caribe inteligentemente manejado como política de estado desde el gobierno de Virgilio Barco hasta el de Álvaro Uribe Vélez que, para bien o para mal, independientemente de la guerra del gobierno colombiano con las mafias y carteles, las florecientes vertientes de negocios ilegales instalados desde esa nación (tráfico de drogas, esmeraldas, armas, prostitución, lavado de dinero, etc.) le otorgan una capacidad de penetración para competir con la influencia petrolera venezolana.

En semejante escenario de alta sensibilidad hemisférica, Venezuela jugaba casi solitaria en un controversial cruce de intereses de rango mundial, ante el cual pese a la importancia de nuestro país en escenarios mundiales como el de la OPEP y las buenas relaciones con los EE.UU. (evidenciada en la autorización del Congreso de EE.UU. y gobierno de Reagan para adquirir los aviones avanzados F-16, multipropósito, que rompió el equilibrio militar en la región); no se contaba con una capacidad nacional interna, especialmente desde 1983 en adelante para respaldar con un polo de desarrollo endógeno la consolidación de una presencia regional centrocaribeña y andina, provechosa y significativa.

El desmoronamiento de la política exterior venezolana hacia estos escenarios desde 1992 en adelante, simultáneamente al desarrollo de la crisis de poder interna; se acompañó de un reflujo significativo del liderazgo empresarial privado que, salvo notables excepciones, (como grupos empresariales que han sabido redimensionar su papel y defender su presencia nacional, como el grupo Cisneros, el Grupo Polar, Banco Venezolano de Crédito, etc.) de lo cual es expresión patética el caso de la C.A. Electricidad de Caracas y su Corporación E de C; quienes habían logrado montar la primera empresa privada del país, por su poder económico y antigüedad, fundada a fines del siglo XIX por el Ing. Ricardo Zuloaga. La Electricidad de Caracas, modelo de un esfuerzo

mancomunado de empresarios y trabajadores durante un siglo de experiencia, fue literalmente abandonada por sus accionistas mayoritarios ante la Oferta Pública de Adquisición (OPA) realizada por la compañía norteamericana AES entre mayo y julio del año 2000, con lo que este grupo eléctrico mundial (con presencia en 22 países del globo) adquirió cerca del 80% de las acciones; quedando apenas como accionistas minoritarios algunos representantes de la familia Zuloaga y allegados, así como trabajadores y sus familiares que conservaron pequeños paquetes accionarios.

La liquidación de los activos de la E.de C. Y Corporación E. De C. en Colombia, Centroamérica y el Caribe, así como algunos a nivel nacional; reconvertidos en dividendos para los nuevos propietarios, indicaban para el observador interesado en ir más allá de la simple especulación crematística, que se había detenido un proceso interesante de expansión y crecimiento de la potencialidad venezolana y, con ello la posibilidad de una estabilización de la sociedad venezolana en un nivel superior de participación en los beneficios y responsabilidades de un mundo en proceso de globalización. La responsabilidad de la dirigencia pública y privada venezolana al no haber sabido dar la talla a semejante reto, es la principal causa que se debe analizar a los efectos de superar la crisis histórica que sigue amenazándonos en pleno siglo XXI; en síntesis, el retroceso interno y externo que se ha operado en la posición de la sociedad venezolana durante la década de 1990 y el transcurso del siglo XXI, lejos de ser atribuible a la voracidad de los poderes, intereses y capitales externos que nos han desplazado; ha sido el resultado de las fallas estructurales de nuestras capacidades y vocación nacional.

Los procesos y acontecimientos críticos desatados desde el año 2001 en adelante nos involucran en una complicación de las tensiones y contradicciones expuestas en los párrafos anteriores, sin modificación significativa en los parámetros generales del comportamiento histórico declinante que se aprecia desde la década anterior. Una sociedad sensiblemente afectada por un aparato económico golpeado por la desinversión, la desindustrialización, el desempleo, la fuga de divisas, la devaluación, la inflación y la inseguridad general; comienza a perder las esperanzas de recuperación que se habían puesto en el nuevo liderazgo elegido desde el año 1998.

Luego de tres años de gobierno, el 2001 es el momento de recuperación gradual de la iniciativa de la oposición política, agravado por la no recuperación del nivel de vida general esperado por la población venezolana (salvo algunos programas de emergencia como el “Plan Bolívar 2000” de efectos controvertidos), se agregaba el problema de la profundización de la intolerancia política entre oficialistas y opositores, con la complicación de la incorporación de la capacidad de coordinación de la respuesta política del estado con la creación de los llamados “Círculos Bolivarianos” (10 de junio de 2001) que combinaba la capacidad política del estado con la potencialidad ofensiva de grupos civiles oficialmente organizados para tales efectos, despertando un sensible recelo y temor en la opinión pública nacional.

Los primeros enfrentamientos en la escalada conflictiva entre oficialistas y oposición, pasan de la incubación al desarrollo pleno en diversos escenarios, como lo son las

tensiones con la jerarquía de la Iglesia Católica, los constantes y crecientes roces contra los medios de comunicación social (especialmente la prensa y televisión privados) y las acciones contra universidades nacionales autónomas; todo ello con el correspondiente recalentamiento y deterioro de las relaciones oficiales con entidades estratégicas como el personal directivo de Petróleos de Venezuela (PDVSA), la alta dirigencia sindical (especialmente la CTV) y la máxima cúpula empresarial de la Federación de Cámaras de Comercio y Producción (FEDECAMARAS) y sus filiales

El conflictivo año 2001 termina con una severa complicación de las relaciones internacionales como consecuencia de la captura (24 de junio) del prófugo funcionario peruano Vladimiro Montesinos escondido en Caracas y extraditado a su país, y los roces entre el gobierno venezolano y el norteamericano frente a la ambigüedad de la posición del régimen de Venezuela frente a situaciones delicadas como el atentado terrorista del 11 de abril en New York y el Pentágono, así como por la intervención de los EE.UU. en Afganistán. Una nueva gira del Presidente venezolano por los países de la OPEP, entre octubre y noviembre, no logró recuperar mejores espacios para la política oficial; al contrario agudiza la oposición interna bajo los temas de la adquisición de un nuevo avión presidencial, los supuestos nexos con la guerrilla colombiana y la solicitud de rectificación de varios puntos críticos en las 49 leyes contenidas en la Ley Habilitante que según la oposición vulneraban los derechos constitucionales de los venezolanos.

Un exitoso paro nacional convocado por la CTV y Fedecámaras, para el 10 de diciembre del 2001, exigiendo la consulta y rectificación en las leyes aprobadas por la vía habilitante, son para la oposición la señal de una recuperación de la iniciativa política, aunque tal vez sobreestimó su capacidad para aprovechar políticamente el descontento social que se estaba acumulando. Por ello, los primeros cuatro meses del año 2002 ponen a prueba la capacidad de movilización que había adquirido dicha oposición y el gobierno, con las marchas desde ambos sectores, particularmente en la conmemoración de las fechas del 23 de enero y el 4 de febrero de ese año, cuando ambas tendencias dieron demostraciones de capacidad de convocatoria. El inicio de la crisis abierta de Petróleos De Venezuela S.A. en febrero, con un manejo directo e impropio de la misma por el propio Presidente Chávez (reconocido luego por él mismo como un error) y la visita a Venezuela de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para verificar las denuncias de violaciones a la libertad de expresión, marcaron las señales necesarias para la agudización de la crisis interna y la precipitación de la oposición hacia una estrategia improvisada y de corto plazo.

Los llamados a una nueva huelga por parte de la CTV y Fedecámaras, para el 9 de abril de 2002, y la movilización del sector petrolero en defensa de lo que denominaban la “meritocracia” en el manejo de la principal empresa nacional; desembocó en una improvisada marcha desde la sede de PDVSA hacia el centro de la ciudad, que parcialmente fue desviada hacia el sector adyacente al Palacio de Gobierno de Miraflores, para exigirle la renuncia al Presidente quien en ese momento hablaba en una cadena nacional por radio y televisión, con las cuales mantenía permanentemente saturada a la opinión pública. En las cuadras adyacentes al Palacio Presidencial un enfrentamiento armado entre sectores del gobierno y la oposición (civiles y policías de ambos bandos) generó una gran cantidad de muertos y heridos, entre ellos periodistas, que fue cubierta y

grabada por los medios de televisión con un gran impacto nacional e internacional, escaramuza que quedó grabada bajo el nombre de la “masacre del Puente Llaguno”. La estrategia de “dividir la pantalla” había permitido a todo el país presenciar simultáneamente la cadena presidencial y el enfrentamiento civil, desatándose una indignación política peligrosamente explotable en el corto plazo por parte de la oposición.

Una crisis militar se desató en horas de la tarde del 11 de abril, altos oficiales del ejército, en especial el Gral. Manuel Rosendo Jefe del Comando Unificado de la F.A.N. (y hasta ese entonces muy cercano colaborador del Presidente Chávez) quien desatendió las órdenes de activar un plan de defensa (Plan Ávila) que podía implicar un mayor derramamiento de sangre y bajas civiles. Simultáneamente, importantes jefes militares del Ejército, Guardia Nacional, Fuerza Aérea y Armada (así como algunos jefes policiales) se pronunciaron públicamente por el desconocimiento de la autoridad presidencial y el evitar accionar las armas de las F.A.N. contra los manifestantes de la población civil. En horas de la noche y hasta la madrugada del 12 de abril se mantuvo un clima de confusión que se reflejaba en las ambiguas declaraciones del Inspector general de las FF.AA. Gral. Lucas Rincón anunciando que el Presidente Chávez había “aceptado” renunciar. Posteriormente, las imágenes de T.V. que presentaban al Presidente Chávez detenido en el Fuerte Tiuna (luego trasladado a la Base Naval de Turiamo y la Isla de la Orchila), conjuntamente al anuncio de la designación del empresario Pedro Carmona Estanga como presidente de un gobierno de transición, cuyo origen y legitimidad nadie conocía.

El efímero gobierno de Carmona, que apenas duró hasta el 13 de abril, se caracterizó por una serie de medidas improvisadas y excluyentes, resultantes de la incoherencia e inmadurez política de las autoridades transitorias, tanto civiles como militares. En primer lugar se mantuvo una torpe comunicación con los gobiernos y organismos extranjeros, sobre todo para poder justificarse como un movimiento que había desplazado al Presidente Chávez por violación de la Constitución, tuvo como primer acto disolver los poderes públicos derivados de esa misma Constitución que decía defender. En segundo lugar, Carmona y su equipo subestimaron los peligros de la situación y las consecuencias de las medidas que habían tomado; lo que se evidenció en la torpe estructuración del nuevo alto mando militar que excluía al ejército de posiciones fundamentales, favoreciendo a los otros componentes de las FF.AA.; lo que no tardó en generar una reacción adversa en el seno de las principales unidades de infantería y blindados. En tercer lugar, la composición del gabinete de gobierno provisional excluyó a sectores fundamentales de la vida política nacional (particularmente AD, la CTV y sectores del mismo chavismo descontento), lo que sumado a la disolución de los poderes públicos ponía a la nación en manos de una camarilla extremadamente sectaria que no emanaba de ninguna representación social significativa. Finalmente, no se tomaron medidas obviamente imprescindibles en una situación de semejante naturaleza: al no implementar ni toque de queda ni suspensión de garantías orientadas a evitar la violencia y saqueos que desestabilizaron al precario gobierno, al no modificar la composición de la Casa Militar y Guardia Presidencial, al no garantizarle una salida rápida y efectiva del país al

Presidente depuesto, prevaleciendo en su lugar ánimos retaliativos innecesarios y contraproducentes.

Luego del retorno del Presidente Chávez al poder, repuesto por el mismo ejército que lo había desplazado, se reinicia la dinámica política con una disposición verbal presidencial hacia la rectificación y una moderación del discurso violento; no obstante, ya para octubre del 2002 gobierno y oposición retoman el camino de la confrontación. La presencia del Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) Dr. César Gaviria en Caracas, no logró evitar que la oposición, entonces representada por la llamada Coordinadora Democrática, se enfrasque nuevamente en una contienda con el Presidente, a quien lanza un ultimatum para renunciar o convocar a elecciones anticipadas; ante lo que Chávez no se inmuta y sale a una nueva gira por Europa. Este conflictivo mes de octubre, desde el día 22 en adelante, concluye con el pronunciamiento de un nutrido y creciente grupo de oficiales y soldados de todos los componentes, quienes tomaron la Plaza Francia de la Urbanización Altamira de Caracas, declarándose en desobediencia frente a lo que consideraban un gobierno violatorio de la Constitución; medida de presión que causó una gran conmoción en el gobierno, pero que a la larga le permitió purgar a las FF.AA. de muchos de sus oponentes.

La O.E.A. ante el nuevo recalentamiento cívico-militar desplaza a su Secretario General a Caracas y logra la instalación de una “Mesa de Negociación y Acuerdos” instalada el 8 de noviembre de ese año, con representantes del gobierno y de la oposición, que no pudo actuar de manera inmediata debido al inicio de un paro nacional el 2 de diciembre, que ante la radicalización extrema de la Coordinadora Democrática, la CTV y Fedecámaras, así como la ineptitud del gobierno en el manejo de conflictos negociables, convirtió al paro en un evento de duración indefinida, con terribles consecuencias para ambos bandos, especialmente por el peso de la paralización de la industria petrolera, cuyos efectos en los mercados interno y externo golpearon duramente los ingresos del estado, pero que al mismo tiempo, dejaron a PDVSA en manos del gobierno para ejecutar una reorganización mucho más profunda que la realizada en las FF.AA.

El inmenso desgaste del paro que concluyó sin resultados efectivos el 2 de febrero de 2003, permitió a la oposición conservar parcialmente la iniciativa al convocar a un proceso de recolección de firmas, denominado “Firmazo”, para solicitar un referendun consultivo, aunque no vinculante, para revocar el mandato del presidente Chávez. No obstante, el gobierno había ya recuperado la mayor parte de la iniciativa política al controlar a las exhaustas PDVSA y FF.AA.NN., establecer un control de cambios que estranguló a sus enemigos empresariales y buena parte de la clase media y lanzar varios planes o “misiones” (Plan Robinson, Misión Ribas, Misión Sucre, etc.) destinadas a recaptar el favor popular, particularmente en los estratos sociales bajos, quienes no se habían incorporado significativamente al recién fracasado paro nacional.

La constitución el denominado “Grupo de Amigos de Venezuela” establecido en la reunión de jefes de estado de la O.E.A. realizada en Quito, compuesto de representantes de los Estados Unidos, Brasil, México, Chile, España y Portugal, instalado desde el 31 de enero del 2003; generó una dinámica tortuosa pero efectiva que sacó a la crisis

venezolana del estancamiento y condujo a la firma del Acuerdo del 29 de mayo, donde quedó aceptado entre el gobierno, la Coordinadora Democrática y los representantes de la denominada sociedad civil, la aceptación de una salida democrática, electoral e institucional a la crisis.

La terrible improductividad que caracteriza al poder legislativo venezolano desde 1998 evitó que este importante cuerpo sirviese de escenario para la discusión y generación al agravamiento de la crisis sociopolítica desde el año 2002; la muestra más evidente de ello fue la incapacidad de generar acuerdos para la elección de los Rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), proceso de vital importancia para canalizar las agudas tensiones a través de mecanismos democráticos de consulta (elecciones, referenda, etc.). En consecuencia, ante la inexplicable omisión legislativa de la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia asumió la designación de una directiva provisional (el 25 de agosto de 2003), resultante de un escenario de decisión no parlamentario y sujeto a presiones que generó como resultado designaciones de personalidades comprometidas, cuyo bajo grado de autonomía decisional permitió la proyección de las contradicciones externas hacia el seno del CNE provisional.

En suma, la década de 1990, no encierra en sí misma una naturaleza propia para la definición histórica de los procesos contemporáneos venezolanos; es más bien definible como una etapa de agudas manifestaciones de los actores sociales y políticos, donde se evidencia una alta incapacidad para proponer, instalar y desarrollar proyectos de mediano y largo alcance para superar la crisis de adaptación de la democracia liberal en Venezuela, que venía manifestándose desde la década de 1980. Los años 90 del siglo XX dejaron la marca del cierre de un ciclo histórico de avance hacia la democracia y la modernización iniciado desde 1936, pero que ha dejado para la década inicial del siglo XXI, las dudas y expectativas para el inicio de un nuevo ciclo que correlacione cualitativamente las dimensiones de nuestra crisis estructural de fondo, con un modelo político capaz de garantizar modernidad y progreso sin romper con una institucionalidad democrática que debemos merecer luego de dos siglos de vida republicana.

Bibliografía Básica.:

ARZOLA, Agustín,
Revisión histórica del 11 de abril de 2002 en el sistema político venezolano.
Caracas, Tesis Maestría Historia Republicana de Venezuela UCV, Caracas,
2008.

BLANCO MUÑOZ, Agustín,
Venezuela del 04F-02 al 06-D-98.
Caracas, FACES-UCV, 1998.

CARRERA DAMAS, Germán,
Alternativas ideológicas en América Latina contemporánea,
Gainesville, Florida USA, Universidad de Florida, 2001,

GARRIDO, Alberto,
Guerrilla y Conspiración militar en Venezuela.
Caracas, Editorial Venezolana, 1999.

GIL YEPEZ, José Antonio,
“De 1976 a nuestros días” en: Política y Economía en Venezuela 1810-1991,
Caracas, Fundación Boulton. 1991.

MEDINA, Pablo,
Rebeliones. Caracas, Corpográfica, 1999.

NAVAS BLANCO, Alberto,
Hacia una recomprensión del tiempo histórico venezolano.
Caracas, Facultad de Humanidades y educación UCV, 2007.

VALLESPIN FERNANDO,
Historia de la Teoría Política.
Madrid, Alianza Editorial, Vol. 5, 2002.

Alberto Navas Blanco
Dr. en Ciencias Políticas UCV
Director Archivo Histórico UCV.
abertonavas@cantv.net

+